



JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
Veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Interlocutorio	1872
Proceso	CONTROVERSIAS DENTRO DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
Deudor	FLOR ALBA DONATO FLÓREZ
Acreedores	BANCO DE BOGOTÁ S.A FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS HÉCTOR ALFONSO MARROQUÍN ÁVILA LUIS MIGUEL COTA MARTÍNEZ
Radicado	050014003001-2021-00967 00
Asunto	DECIDE SEGUNDAS CONTROVERSIAS

Procede el Juzgado a resolver las controversias presentadas por el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS, dentro del trámite de negociación de las deudas de la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ.

ANTECEDENTES

La señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ en su calidad de persona natural no comerciante y trabajadora independiente (vendedora de bienes raíces), adquirió a lo largo de su ejercicio profesional, varias obligaciones pecuniarias respaldadas con títulos valores.

Entre aquellas obligaciones se encuentran el crédito hipotecario suscrito en favor del señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS; el cual, a la fecha de presentación de la solicitud del trámite de negociación ascendía a la suma de \$ 50.000.000 por capital y \$ 12.000.000 por intereses. Puso de presente la insolventada en su solicitud que, los intereses moratorios de la obligación en mención superaban la tasa legal de usura, por lo que, pese a que las cuotas mensuales eran pagadas mes a mes, para el año 2020 aquellos réditos se

acumularon en una suma “impagable”.

Ante la problemática económica generada por la pandemia Covid 19, más los intereses cobrados por el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS, la deudora vio disminuido de manera considerable los ingresos obtenidos en el desarrollo de su actividad económica, tanto en la ciudad de Medellín como en Bogotá, presentando problemas de iliquidez (no de activos), de manera que, con el fin de conservar su buen historial crediticio y previo a incurrir en el presente trámite, negoció de manera directa con sus acreedores, logrando la extinción de varias deudas y la condonación de algunos de los intereses de las restantes; específicamente en lo que atañe con el acreedor en comento, se acordó verbalmente que el título que respalda la obligación principal fuera pagado el mes de enero de 2021, con intereses a la tasa de 2% mensual, circunstancia que advirtió haber sido ignorada por aquel cuando a principios del año 2021 presentó trámite ejecutivo en su contra.

Su problemática económica continuó extendiéndose, y producto de ello fue la solicitud de inicio de trámite de negociación de deudas de persona natural no comerciante presentada el 30 de junio de 2021 ante el CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA - UNAULA, en la que incluyó la obligación crediticia con el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS y ofreció para saldar sus deudas, la venta y/o remate de su casa, único patrimonio.

Iniciada la audiencia de negociación el día 25 de agosto de 2021, fueron propuestas por el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS las siguientes controversias, oportunamente sustentadas:

- El centro de conciliación UNAULA ubicado en la ciudad de Medellín, no es competente para conocer del trámite de negociación de deudas de la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ, toda vez que el domicilio de esta última se encuentra ubicado en Utica, Cundinamarca; lugar donde fue suscrita una letra de cambio a su favor; se encuentra el inmueble objeto del gravamen hipotecario del cual es acreedor (escritura pública N° 2778 del 8 de mayo de 2019); funciona la inmobiliaria de su propiedad; aquella ejerce su actividad económica; enajena inmuebles; arrienda viviendas; administra dos hoteles de propiedad de sus hijos y transporta turistas desde Bogotá a cualquier otro lugar. Precisa además que tiene varias propiedades en

Tobia, Villavicencio.

- En el presente tramite debe ser incluido en calidad de litisconsorte, el señor JHON MANUEL ÁVILA DONATO, hijo de la insolventada, quien suscribió de manera conjunta con esta, la obligación hipotecaria respecto de la cual funge como acreedor, y que es objeto del trámite de liquidación.
- La deudora incurre en falsedad, pues es una persona totalmente solvente y capaz de responder por sus deudas de manera total y oportuna; en tal sentido, los argumentos sobre los que basa o justifica la cesación de los pagos a sus acreedores carecen de veracidad.
- El 17 y 18 de julio y el 6 de agosto, de 2021, radicó ante la conciliadora designada, escritos manifestando que la deudora no cuenta con domicilio en Medellín, empero, a la fecha no se le ha dado trámite.
- Recusa, a la conciliadora LINA MARÍA VELÁSQUEZ RESTREPO, señalando que el tramite debe adelantarse por un Juez Civil Municipal ubicado en el último domicilio de la deudora, el cual reitera, no ser Medellín, de conformidad con los artículos 534 y 541 del Código General del Proceso; ulteriormente, de manera contraria señala que en virtud de lo establecido en el artículo 533 ibídem, el trámite debe ser conocido por un conciliador ubicado en Utica, Cundinamarca. Fundamenta la recusación en los numerales 1,3,6,8 del artículo 23 del Decreto 2677 de 2012.

Tales objeciones fueron replicadas por el apoderado de la deudora y posteriormente asignadas por reparto a esta Judicatura, donde por auto del 13 de octubre de 2021 se decretaron las pruebas que se consideraron pertinentes, y **finalmente mediante providencia del 25 de mayo de 2022 fueron resueltas de manera desfavorable a los intereses del señor GARZÓN SALINAS.**

Frente a esta decisión, el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, recursos que fueron desestimados por improcedentes.

Una vez reanudado el trámite de negociación de las deudas de la señora FLOR ALBA DONATO SALINAS, el señor GARZÓN SALINAS **presentó nuevamente controversias**, consistentes en:

- Aduce que el auto proferido el 25 de mayo de 2022 es nulo por haberse perdido, con anterioridad, la competencia para conocer del trámite, pues los términos establecidos en el artículo 120, 121 y 544 del Código General del Proceso ya fueron superados.
- La deudora omitió denunciar la totalidad de los bienes que conforman su activo, pues en la solicitud de negociación de dudas incluyó únicamente el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 162-7987, dejando de lado la motocicleta de placas WOU46A y el establecimiento INVERUTICA.
- La deudora ostenta la calidad de comerciante y, en consecuencia, no puede ser objeto del trámite estipulado en el artículo 531 y siguientes del Estatuto Procesal, pues cuenta con matrícula mercantil expedida el 01 de julio de 2022 por la Cámara de Comercio de Villeta, Cundinamarca, donde figura como actividad económica “FINCA RAÍZ”, y además es propietaria del establecimiento de comercio ya referenciado en el inciso anterior; circunstancias encasilladas como actos, operaciones y empresas mercantiles, y catalogadas como actos de comercio de conformidad con el artículo 20 del Código de Comercio.
- Nuevamente propone, esta vez no como nulidad, sino como controversia, que los términos establecidos en el artículo 120, 121, 544 y 551 del Código General del Proceso ya fueron superados.

Frente a ello, el apoderado de la deudora, al descorrer el traslado, solicitó condenar en agencias en derecho al señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS, ante la improsperidad de las controversias y nulidad propuesta, tachando de abusivo el ejercicio del derecho por aquel, y señalando que el mismo ha entorpecido y dilatado la negociación de las deudas de su poderdante al proponer por segunda vez controversias que pudieron haberse alegado desde un primer momento.

Por otro lado, expone que algunos de los reparos que hoy son objeto de reparo consisten en volver sobre asuntos que ya fueron resueltos en las primeras controversias, desconociendo que el trámite es de única instancia; advierte que las estas fueron sustentadas de manera extemporánea.

La nulidad propuesta no esta llamada a prosperar, en primer lugar, por que los fundamentos en los que es sustentada no tienen validez alguna y toda vez que crearía inseguridad jurídica. Aduce que el accionante confunde la instancia de

negociación de deudas en la que se encuentra y el tipo de providencia a proferir.

Pone de presente que, el momento oportuno para controvertir los activos de la deudora es dentro de la audiencia de negociación de deudas, etapa a la que no se ha podido avanzar ante las actuaciones entorpecedoras propuestas por aquel acreedor, además señala que el bien que se denuncia como excluido de los activos es el mismo que ha sido incluido.

Sobre la tercera controversia indicó que, si bien la deudora se inscribió en el año 2017 en el registro mercantil, para la anualidad siguiente el mismo no fue renovado, precisa que los supuestos de hecho contemplados en el artículo 10 del Código de Comercio son presunciones que pueden ser desvirtuadas, en el presente caso con la afirmación en contrario de la deudora y con el hecho de la falta de renovación desde hace mas de cuatro años, y toda vez que el establecimiento de comercio denominado "INVERUTICA" es de propiedad del hijo de la insolventada.

El cuarto reparo no tiene vocación a prosperar tal y como ya fue argumentado en los pronunciamientos efectuados sobre la nulidad que versa sobre el mismo asunto.

TRÁMITE PROCESAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 534 del Código General del Proceso, procede el Juzgado a resolver las controversias propuestas.

CONSIDERACIONES:

Competencia

Si bien, el artículo 534 del Código General del Proceso prevé las controversias como un mecanismo para debatir la información suministrada por el deudor con relación al trámite adelantado, considera el Despacho que dicho mecanismo procede para toda discrepancia diferente a las acreencias, que ocurran en el trámite de la audiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 552 del Código General del Proceso.

Así entonces, en virtud de lo previsto en los artículos 534 y 552 del Código General del Proceso, este Juzgado es competente para conocer de la controversia presentada.

Problema jurídico

Conforme a la situación fáctica planteada, debe este Despacho después de dejar sentado el tipo de trámite en donde nos encontramos ubicados y las normas que lo regulan; procederá con un análisis sobre las etapas en las que debe desarrollarse la audiencia de conciliación de las deudas de una persona que se reputa como insolvente, así como los asuntos que en tal escenario pueden discutirse; y finalmente, verificando si con las pruebas aportadas por las partes, puede establecerse que la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ ostenta la calidad de comerciante, y en consecuencia se encuentra imposibilitada para incoar el trámite dispuesto en el Capítulo II del Título IV del Código General del Proceso.

Finalmente se resolverá sobre la condena en agencias en derecho solicitada por el apoderado de la deudora.

PREMISAS JURÍDICAS

El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante es un conjunto de herramientas que el Código General del Proceso dispone para atender la crisis de un deudor que sea persona natural no comerciante, y permitir su reincorporación al mercado.

En tal sentido, no pueden acceder a los procedimientos de insolvencia previstos en el Código General del Proceso las personas jurídicas, las personas naturales que se dediquen profesionalmente al comercio, ni las naturales que tengan control sobre una sociedad o empresa que está en crisis.

El artículo 539 del Código General del Proceso establece los requisitos que la solicitud de negociación de deuda debe contener, misma que debe presentarse en ante la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 533 del mismo estatuto:

ARTÍCULO 533. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS Y CONVALIDACIÓN DE ACUERDOS DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE. Conocerán de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar de domicilio del deudor, lo harán a través de sus notarios y

conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamento.

(...)

Sobre el trámite de negociación de deudas, el capítulo II del título IV del Código general del proceso establece:

ARTÍCULO 538. SUPUESTOS DE INSOLVENCIA. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos.

Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

ARTÍCULO 539. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS. La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de apoderado judicial y a ella se anexarán los siguientes documentos:

1. Un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos.
2. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva.
3. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo.
4. Una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posea en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable.
5. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual.
6. Certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos, que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento.
7. Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones descontados los gastos necesarios para la subsistencia del deudor

y de las personas a su cargo si los hubiese, de conservación de los bienes y los gastos del procedimiento.

8. Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente. En el evento en que la haya tenido, deberá aportar copia de la escritura pública o de la sentencia por medio de la cual esta se haya liquidado, o de la sentencia que haya declarado la separación de bienes, si ello ocurrió dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud. En cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega.
9. Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios.

PARÁGRAFO PRIMERO. La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La relación de acreedores y de bienes deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud.

CASO CONCRETO

Se pretende desatar las segundas controversias propuestas en la audiencia de negociación de las deudas de la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ, por el acreedor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS.

En primer lugar, se dejará claro que, pese a los requerimientos efectuados por el Despacho, a la presente fecha no se ha remitido el expediente completo de la negociación de las deudas de aquella insolventada, de manera que, no fue posible para esta Judicatura corroborar la extemporaneidad de la sustentación de las controversias señalada por el apoderado de aquella, y consecuencia, se procederá a pronunciarse sobre las mimas.

El régimen de insolvencia de las personas naturales no comerciantes, que incluye tanto la negociación de sus deudas como el trámite liquidatorio, se encuentra regulada en el Título IV de la Sección tercera del Código General del proceso, donde podemos encontrar, específicamente en el Capítulo II el procedimiento de la negociación de deudas, mismo en el que hoy nos encontramos.

Ahora, se procederá a desatar cada una de las controversias propuestas por el señor GARZÓN SALINAS:

- La deudora omitió denunciar la totalidad de los bienes que conforman su activo, pues en la solicitud de negociación no se incluyó la motocicleta de placas WOU46A y el establecimiento INVERUTICA de su propiedad.

Frente a tales reparos, se advierte al solicitante que los mismos podrán ser expuestos en la audiencia de negociación que se encuentra suspendida con ocasión de la presente controversia, pues de conformidad con el artículo 550 y 553 del Código General del Proceso, en tal escenario no solo se discuten las acreencias, pues es objeto de debate también el acuerdo de pago propuesto por la insolventada, y las cuotas, actos jurídicos, formas de pago, plazos además de los bienes con los que se pretende saldar las deudas.

De manera que la controversia en desarrollo no podrá prosperar, pues existiendo un escenario idóneo para su discusión, no puede el Juez Civil Municipal inmiscuirse, en principio, en instancias que legalmente fueron atribuidas a otros escenarios. En este punto específico será la conciliadora, quien con fundamento en la prueba que allegue el interesado, determine se incluye o no dentro del inventario de bienes el denunciado por al acreedor como motocicleta WOU-46A

- La deudora ostenta la calidad de comerciante y, en consecuencia, no puede ser objeto del trámite estipulado en el artículo 531 y siguientes del Estatuto Procesal, pues cuenta con matrícula mercantil expedida el 01 de julio de 2022 por la Cámara de Comercio de Villeta, Cundinamarca, es propietaria del establecimiento de comercio INVERUTICA; ambas circunstancias encasilladas como actos, operaciones y empresas mercantiles y catalogadas como actos de comercio de conformidad con el artículo 20 del Código de Comercio.

Frente a ello, quien propone la controversia aporta como prueba únicamente una certificación del registro mercantil de la deudora, misma que pese a que fue expedida el 1 de julio de 2022, da cuenta que la señora DONATO FLÓREZ no ha renovado tal registro desde el año 2018 y, en consecuencia, no puede predicarse en virtud de tal documento, que aun ostente la calidad de comerciante.

- Nulidad y controversia propuestas sobre el auto proferido el 25 de mayo de

2022, se argumentó haberse perdido competencia por parte de este Despacho para conocer del trámite, pues los términos establecidos en el artículo 120, 121, 544 y 551 del Código General del Proceso ya fueron superados.

Los asuntos en comento se trabajarán de manera conjunta en tanto pese a haber sido alegadas de manera separada, se fundamentan en los mismos reparos.

Como se advirtió en la parte inicial del análisis del caso concreto, nos encontramos en el trámite de la resolución de las controversias que se susciten dentro de la negociación de las deudas de una persona no comerciante, mismo que se encuentra regulado por el artículo 534 del Código General del Proceso, a diferencia de la negociación como tal que esta reglamentada en los artículos 538 y siguientes del mismo Estatuto.

El trámite de negociación de las deudas tiene un término perentorio de sesenta (60) días dentro del cual debe desarrollarse, prorrogable por treinta (30) días más (artículo 544 del Código General del Proceso), empero, no existe norma que limite el tiempo en que las controversias o las objeciones deber ser resueltas, de manera que es claro que este Despacho jamás ha superado términos o ha perdido competencia en tal sentido para conocer el asunto que hoy nos atañe.

Respecto al artículo 120 del Código General del Proceso, si bien la providencia que resuelve este asunto no ha sido emitida dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en la que el expediente fue remitido, lo cierto es que, en dicha norma en comento no se contempla la pérdida de competencia para los casos en los que el auto sea proferido por fuera del término allí reglado; adicional a ello, pierde de vista el acreedor la alta congestión judicial con la que cuenta no solo este Despacho, si no la gran mayoría de Judicaturas del país, sumado a los diversos problemas de conectividad y recurso humano; que hacen que la teleología de la norma en comento resulte imposible de llevar a la práctica.

Finalmente, el artículo 121 del mismo Estatuto Procesal consagra el término de un (1) año, prorrogable por seis (6) meses para proferir sentencia, providencia que no es emitida en este trámite, pues las controversias son resueltas mediante auto; de manera que, quien propone la controversia en tal sentido se equivoca nuevamente al pretender aplicar tal perentoriedad al presente asunto.

Si bien la pérdida de competencia es una causal de nulidad (numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso) lo cierto es que tal supuesto de hecho no se presenta en la controversia objeto de pronunciamiento, por lo que, aquella ni la controversia presentada en el mismo sentido tienen vocación para prosperar.

Conforme a lo solicitado por el apoderado de la parte actora, y de lo consagrado en el inciso segundo del numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas al acreedor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS, en donde lo que corresponde a agencias en derecho se fija la suma de \$1'000.000,00 (Acuerdo N° PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016).

Como corolario de lo anterior, es dable para este Despacho de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente y las consideraciones que anteceden, concluir que ninguno de los puntos de las controversias y/o nulidad, planteadas por el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINA en la audiencia de negociación de las deudas de la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ, están llamadas a prosperar.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que no prosperan las controversias presentadas por el señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS ante el CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA – UNAULA, en la audiencia inicial del trámite de negociación de las deudas de la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR la nulidad presentada por FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS, denominada “Pérdida de competencia”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas al señor FABIO ELBERTO GARZÓN SALINAS, en donde lo que corresponde a agencias en derecho se fija la suma de \$1'000.000,00 (Acuerdo N° PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016).

CUARTO: DEVOLVER, una vez ejecutoriado el presente auto, el expediente al CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA – UNAULA, para que la conciliadora LINA MARÍA VELÁSQUEZ RESTREPO, levante la suspensión de la audiencia negociación de las deudas de la señora FLOR ALBA DONATO FLÓREZ y continúe con el trámite, sin atender ninguna otra objeción o controversias, pues ambas deben presentarse por una sola vez en el al interior del trámite y por todos los acreedores.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Gustavo Adolfo Ramirez Serna
Juez
Juzgado Municipal
Civil 001 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **99e81e88239d90e0552a1ff75eeb6c0268cb927d0ec09dd66eea6860fbd2ea03**

Documento generado en 28/11/2022 10:40:33 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>